



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIV - N° 2312

Bogotá, D. C., martes, 9 de diciembre de 2025

EDICIÓN DE 11 PÁGINAS

DIRECTORES:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
299 DE 2025 SENADO, 363 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de El Doncello, Caquetá, como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera.

Bogotá DC Diciembre de 2025

Doctor
Jorge Eliecer Laverde Vargas
Secretario
Comisión Sexta Constitucional
Senado de la República
Comision6senado@gmail.com

Referencia: Informe de Ponencia para primer debate al proyecto de ley 299 de 2025 Senado, 363 de 2024 Cámara.

En cumplimiento de la designación realizada por el Presidente de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República presento informe de ponencia para primer debate al proyecto de Ley **N° 299 de 2025 Senado – N° 363 de 2024 Cámara** "por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de el Doncello Caquetá como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera".

Cordialmente,

Soledad Tamayo Tamayo
Ponencia PL 299 de 2025 Senado, 363 de 2024 Cámara
Senadora de la República

Informe de Ponencia para primer debate en Comisión Sexta del Senado de la República al proyecto de Ley **N° 299 de 2025 Senado – N° 363 de 2024 Cámara** "por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de el Doncello Caquetá como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera" es de autoría del Representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá Héctor Mauricio Cuellar Pinzón.

I. Antecedentes.

El proyecto de ley **N° 299 de 2025 Senado – N° 363 de 2024 Cámara** "por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de el Doncello Caquetá como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera" es de autoría del Representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá Héctor Mauricio Cuellar Pinzón.

Esta iniciativa se radica por primera vez, fue aprobada en primer debate en la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes el 20 de mayo de 2024 y en Sesión Plenaria del 1 de octubre de 2025.

II. Objeto.

De conformidad con las exposiciones de motivos y los articulados de los proyectos de ley, se pretende, entre otros:

- Exaltar el oficio relacionado con el cultivo, producción, procesamiento y comercialización del caucho natural en los departamentos de Caquetá, Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare, y Putumayo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación e incluirlo en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.
- Reconocer a El Doncello Caquetá como cuna del cultivo, producción, procesamiento y procesamiento del caucho natural en Colombia.
- Promover el Festival de la danza de la labor Cauchera en El Doncello Caquetá como un espacio cultural y económico que promueva la articulación entre la industria del caucho, las artes, la artesanía y el turismo

<p>El propósito fundamental del proyecto de ley es dar reconocimiento institucional y cultural al caucho natural y su industria en Colombia, honrar la historia de El Doncello como epicentro del caucho, y convertir la labor cauchera en una manifestación cultural que se celebra mediante un festival. No es tanto (al menos en su formulación pública) una ley de fomento económico o de regulación industrial estricta, sino más bien de exaltación, preservación patrimonial y visibilización cultural.</p> <p>III. Marco Constitucional y Legal.</p> <ul style="list-style-type: none">Constitución Política <p>Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.</p> <p>Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.</p> <p>Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.</p> <p>Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.</p> <p>Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.</p> <p>La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El</p>	<p>Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.</p> <p>Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.</p> <p>Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.</p> <p>Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.</p> <p>8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;</p> <ul style="list-style-type: none">Leyes <p>Ley 397 de 1997¹ Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias</p> <p>Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:</p> <p>1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que</p> <p>¹ https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337</p>
<p>comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.</p> <p>2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas.</p> <p>5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación.</p> <p>Artículo 4º.- Modificado por el art. 1, Ley 1185 de 2008. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.</p> <p>Artículo 11-1.- Adicionado por el art. 8, Ley 1185 de 2008, Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.</p> <p>Ley 1037 de 2006² por medio de la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).</p> <p>² https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1672986</p>	<p>Artículo 1º. Finalidades de la Convención. La presente Convención tiene las siguientes finalidades:</p> <p>a) La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial;</p> <p>b) El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate;</p> <p>c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;</p> <p>d) La cooperación y asistencia internacionales.</p> <p>Artículo 11. Funciones de los Estados Partes. Incumbe a cada Estado Parte.</p> <p>a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial presente en su territorio;</p> <p>b) Entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2º, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.</p> <p>Artículo 12. Inventarios.</p> <p>1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.</p> <p>2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el artículo 29 cada Estado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.</p> <p>Ley 1185 de 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.”³</p> <p>Decreto 2941 de 2009⁴ Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial</p> <p>³ Ley 1185 de 2008, Secretaría General del Senado. Extraído de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html</p> <p>⁴ https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37082</p>

<p>Artículo 2°. Integración del Patrimonio Cultural Inmaterial. El Patrimonio Cultural Inmaterial se integra en la forma dispuesta en los artículos 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008.</p> <p>En consonancia con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008, hacen parte de dicho patrimonio los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural. El Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a las personas que son creadoras o portadoras de las manifestaciones que lo integran.</p> <p>• Jurisprudencia</p> <p>Sentencia C-111 de 2017-⁵</p> <p>...(…) es innegable que, por mandato constitucional y al tenor del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya incorporación al derecho interno se realiza en los términos del artículo 93 de la Carta, el Estado tiene el deber jurídico de proteger, fomentar, difundir y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, incluso por la vía de la adopción de medidas financieras o de carácter presupuestal. Lo anterior se ve reforzado por la Observación General No. 21 del CDESC, en la que se destaca el derecho que tiene toda persona de participar en la vida cultural, generando a cargo del Estado obligaciones de respeto, protección y cumplimiento. (negrilla fuera de texto)</p> <p>Sentencia C 082 de 2020⁶</p> <p>Patrimonio Cultural de la Nación - Reconocimiento y protección constitucional</p> <p>⁵ https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-111-17.htm</p> <p>⁶ https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117754</p>	<p>(...) <i>la Sala Plena concluye que la Asamblea Nacional Constituyente reconoció como elemento característico de la Constitución Política el derecho a la cultura y la especial protección de la misma por parte del Estado. En particular, los constituyentes manifestaron de manera explícita la necesidad de proteger el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico y los bienes culturales decisivos para la configuración y conservación de la identidad nacional.</i> (negrilla fuera de texto)</p> <p>Sentencia C-332/23⁷</p> <p>(...) <i>la jurisprudencia ha sido enfática en la libertad de configuración normativa para que el Legislador regule cómo el Estado va a concretar esta obligación de preservación y conservación de la cultura, dentro de la cual puede, si así lo considera, determinar reglas para guiar la identificación de los bienes materiales o inmateriales que estarán cobijados por el patrimonio cultural de la Nación. No obstante, tal como lo destacó la Corte en la Sentencia C-264 de 2014, el Congreso excede su facultad de configuración cuando excluye por derecho unos bienes que, dependiendo de un contexto específico, podrían tener una relevancia histórica, cultural y arqueológica.</i> (negrilla fuera de texto)</p> <p>IV. Importancia histórica, económica y social del caucho natural en Colombia</p> <p>El caucho natural ha sido, desde finales del siglo XIX, un producto determinante en el desarrollo económico, social y cultural de regiones enteras del país. Tal como lo establece el autor, el caucho ha sido un elemento vital en el desarrollo económico y social de varias regiones de Colombia, especialmente en departamentos como Caquetá, Meta y Santander.</p> <p>Durante la primera mitad del siglo XX, la Amazonía colombiana vivió transformaciones profundas alrededor de la recolección y comercialización del látex. Posteriormente, Colombia avanzó hacia “el establecimiento de plantaciones organizadas que maximizaron la producción y calidad del látex”, consolidando al país como un actor emergente en el mercado regional de caucho natural.</p> <p>El tránsito de la explotación silvestre hacia sistemas de producción tecnificada permitió mejorar la productividad, garantizar sostenibilidad y ampliar la base de beneficiarios. Como se establece en la exposición de motivos las plantaciones permitieron un mejor aprovechamiento del recurso, reduciendo la dependencia de</p> <p>⁷ https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/c-332-23.htm</p>
<p>fuentes silvestres y mejorando las técnicas de extracción y procesamiento del látex.</p> <p>Hoy el sector del caucho natural abarca aproximadamente 60.000 hectáreas distribuidas en 17 departamentos, con un núcleo productivo en Meta, Santander, Antioquia y, de manera sobresaliente, Caquetá. El sector genera 17.250 empleos directos y más de 51.000 empleos indirectos, con la ventaja adicional de que un cultivo de caucho puede mantenerse productivo hasta por 35 años, convirtiéndolo en un modelo de desarrollo rural sostenible de largo plazo.</p> <p>Pero es Caquetá —y en particular el municipio de El Doncello— donde esta cadena ha logrado uno de sus mayores niveles de arraigo, identidad y estructuración comunitaria. Allí, más de 1.200 familias viven del caucho, con un promedio de 4,4 hectáreas plantadas por hogar, alcanzando niveles significativos de producción anual y consolidando la actividad como columna vertebral de la economía local.</p> <p>Es necesario manifestar que el caucho en Caquetá no solo representa ingresos, representa tejido social, organización comunitaria, asociatividad productiva, fortalecimiento de capacidades rurales y alternativas reales frente a economías ilícitas.</p> <p>V. Justificación de la Iniciativa y Consideraciones de la Ponencia.</p> <p>Se considera importante manifestar que la UNESCO⁸ se ha pronunciado respecto de la pertinencia de preservar y salvaguardar las manifestaciones culturales inmateriales ya que se corre el riesgo de que algunos elementos del patrimonio cultural inmaterial mueran o desaparezcan si no se les ayuda. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial surge como una necesidad prioritaria para afrontar los desafíos contemporáneos generados por diferentes factores que pueden afectar la existencia del patrimonio cultural inmaterial.</p> <p>Para Daniela Rodríguez⁹ la salvaguardia, más allá de la definición dada por la Unesco⁸, ha demostrado ser en la práctica una acción de protección, compromiso, vigilancia y prevención que busca garantizar modos de vida, que defiende el patrimonio humano y protege la identidad regional. Es lo que reconecta a las personas en medio de la diferencia, el intercambio y el respeto. La salvaguardia promueve una reflexión que ayuda a retornar y recuperar la tradición apelando a la memoria de sus portadores para reivindicar la importancia de lo propio hacia dentro y hacia fuera. Es una forma de resistencia, de autonomía, de independencia, de afirmación de valores propios y de reconocimiento de un territorio.</p> <p>⁸ https://ich.unesco.org/es/salvaguardia-00012</p> <p>⁹ Ibidem</p>	<p>• Razones para reconocer a El Doncello como Cuna del Caucho Natural en Colombia.</p> <p>El Doncello es, sin lugar a dudas, un epicentro histórico, social y cultural del desarrollo cauchero en el país. Su aporte se expresa en al menos cuatro dimensiones:</p> <p>1 Liderazgo productivo. El municipio concentra una de las mayores áreas sembradas del país y ha logrado altos niveles de tecnificación y productividad. En El Doncello, el caucho no es una actividad marginal sino la base económica para cientos de familias, cuyo sustento depende del látex, su transformación y comercialización.</p> <p>2. Aporte histórico a la consolidación de la cauchicultura en la Amazonía. El Doncello fue una de las primeras zonas en el país en transitar del aprovechamiento silvestre hacia sistemas organizados de cultivo. Su experiencia permitió replicar modelos y técnicas en municipios vecinos y en otros departamentos amazónicos.</p> <p>3. Fortalecimiento del tejido asociativo. Las asociaciones cauchicultoras de El Doncello se convirtieron en modelos de organización rural, dando a los productores acceso a mejores precios, asistencia técnica, formalización y financiamiento.</p> <p>4. Construcción de identidad cultural. A diferencia de otras regiones, en El Doncello el caucho no solo es un producto económico: es un símbolo de identidad, orgullo y memoria colectiva. Esta dimensión simbólica se expresa con especial fuerza en la Danza de la Labor Cauchera, manifestación cultural única en Colombia, nacida en este municipio.</p> <p>Por estas razones, el proyecto busca otorgar a El Doncello una distinción que reconoce su liderazgo histórico y actual, y que permitirá robustecer políticas culturales, patrimoniales y productivas alrededor del caucho natural.</p> <p>• La Danza de la Labor Cauchera: patrimonio vivo del Caquetá.</p> <p>Manifiesta el autor que la Danza de la Labor Cauchera, creada por la Casa de la Cultura Jesús Ángel González Arias y presentada por primera vez en 1998, constituye la expresión cultural más representativa del trabajo cauchero en Colombia, es una representación cultural emblemática que simboliza el proceso de extracción y producción del caucho.</p> <p>Desde su origen, esta danza ha integrado elementos que narran de manera artística y fiel todas las fases del cultivo, desde la preparación del terreno hasta el</p>

<p>procesamiento del látex. Cada gesto, cada herramienta y cada movimiento coreográfico tienen un significado vinculado a la vida rural y al esfuerzo de los cauchicultores.</p> <p>La danza representa:</p> <ul style="list-style-type: none">• La selección y preparación del terreno,• La siembra y cuidados del árbol,• El rayado para extraer el látex,• El transporte, laminado, secado y empaclado,• La celebración del trabajo cumplido. <p>Esta puesta en escena, enriquecida con vestuarios tradicionales, parafernalia auténtica y un acompañamiento musical basado en el bambuco, constituye un relato identitario profundo sobre la vida campesina del Caquetá.</p> <p>En 2005, un acto del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias respaldó la importancia cultural de esta danza, reconociendo el bambuco como una expresión fundamental en las danzas indígenas y campesinas de la región. Esta danza es una representación artística que recrea cada etapa con fidelidad y que su institucionalización permitirá protegerla y proyectarla hacia escenarios nacionales e internacionales</p> <ul style="list-style-type: none">• Importancia cultural, económica y simbólica de la iniciativa legislativa <p>El proyecto de ley objeto de este informe de ponencia, cumple con objetivos esenciales para el país y para el departamento del Caquetá:</p> <p>1. Preserva y fortalece un patrimonio cultural inmaterial diverso y único. El reconocimiento legislativo que se propone, contribuye a que la danza, el festival y las tradiciones cauchicultoras sean visibilizadas, valoradas y protegidas como parte del patrimonio cultural de la Nación.</p> <p>2. Promueve el turismo cultural y dinamiza las economías locales. Un festival reconocido a nivel nacional tiene capacidad de atraer visitantes, generar ingresos por servicios locales, incentivar el emprendimiento cultural y potenciar la cadena productiva del caucho en su dimensión económica.</p> <p>3. Contribuye al diálogo intergeneracional y a la transmisión de saberes. El festival y la exaltación del caucho como patrimonio cultural permiten que los jóvenes</p>	<p>conozcan la importancia de esta tradición económica y social, asegurando su continuidad y sostenibilidad.</p> <p>4. Visibiliza a una región históricamente marginada. El Caquetá —y en particular El Doncello— ha enfrentado históricamente problemas asociados a economías ilícitas, conflictividad territorial y ausencia de Estado. Exaltar la cultura del caucho es reconocer un camino alternativo de desarrollo, productividad y dignidad rural.</p> <p>5. Articula cultura, economía y memoria. El proyecto integra tres dimensiones esenciales:</p> <ul style="list-style-type: none">• La económica, que reconoce el aporte del caucho al empleo y al desarrollo rural;• La cultural, que protege una manifestación artística única;• La simbólica, que reivindica el esfuerzo de miles de familias históricamente invisibilizadas. <p>Para concluir, se considera que el Proyecto de Ley N° 299 de 2025 Senado – N° 363 de 2024 Cámara no es solamente una norma declarativa: es una herramienta de reconocimiento, dignificación e impulso para un sector productivo fundamental y para una región que ha construido identidad, economía y cohesión social alrededor del caucho natural.</p> <p>Exaltar a El Doncello como cuna del caucho en Colombia, reconocer la importancia de la cadena productiva y promover el Festival de la Danza de la Labor Cauchera constituye un acto de justicia histórica, un compromiso con el patrimonio cultural y un apoyo concreto al desarrollo rural sostenible del país.</p> <p>Por estas razones, la aprobación de esta iniciativa es no solo conveniente, sino necesaria para honrar la historia, proteger la cultura y fortalecer el futuro de la industria cauchera y de las comunidades que la sostienen.</p> <p>VI. Impacto Fiscal.</p> <p>Con relación al impacto fiscal y al cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el impacto fiscal que se genere con esta normatividad deberá ser cubierto por el gobierno nacional en cumplimiento del marco del marco fiscal de mediano plazo y en los distintos presupuestos de las entidades responsables, como quiera que se trata de articular instrumentos de gestión pública.</p>
<p>Además, es necesario tener en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto al impacto fiscal de las iniciativas legislativas, en particular la sentencia C-502 de 2007 donde se precisó que el contenido de este precepto es sólo un parámetro de racionalidad de la actividad legislativa y no un requisito de trámite necesario para que el Congreso pueda desarrollar su labor. Textualmente se consigna en esta decisión:</p> <p>...(…)Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa.</p> <p>Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda, además que le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.</p> <p>Esta postura fue reiterada en sentencia C-315 de 2008 en la cual se sostuvo que: ...(...) "el mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático".</p>	<p>VII. Conflicto de Interés.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019 manifiesto que no existen circunstancias o eventos que me puedan generar un conflicto de interés para la presentación de esta ponencia, así como para la discusión y votación de este proyecto de ley.</p> <p>Así mismo, corresponde a la esfera privada de cada uno de los congresistas el examen del contenido de la presente iniciativa legislativa, y de otros elementos que puedan derivarse o entenderse como generadores de conflicto de interés y su responsabilidad de manifestarlo al Congreso de la República, durante el trámite de esta.</p>

<p>VIII. Proposición.</p> <p>En virtud de las consideraciones expuestas rindo ponencia positiva al proyecto de ley N° 299 de 2025 Senado – N° 363 de 2024 Cámara "por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de el Doncello Caquetá como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera" y solicito respetuosamente a los Honorables Senadores de la Comisión Sexta del Senado de la República, dar el primer debate a esta iniciativa por los argumentos expuestos a lo largo de este informe de ponencia.</p> <p>Agradeciendo su atención.</p> <p>Atentamente,</p> <div><p>Soledad Tamayo Tamayo Ponencia PL 299 de 2025 Senado, 363 de 2024 Cámara Senadora de la República</p></div>	<p>IX. Texto Propuesto para primer debate en la Comisión Sexta de Senado, del proyecto de ley 299 de 2025 Senado / 363 de 2024 Cámara. "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA EL CULTIVO, PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL CAUCHO NATURAL, SE RECONOCE AL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ COMO CUNA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA Y SE PROMUEVE EL FESTIVAL DE LA DANZA DE LA LABOR CAUCHERA"</p> <p>EL CONGRESO DE COLOMBIA,</p> <p>DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°. Exaltación. Exáltese el oficio relacionado con el cultivo, producción, procesamiento y comercialización del caucho natural en los departamentos de Caquetá, Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare, y Putumayo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Se incentiva la postulación de estas tradiciones para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para asegurar su preservación y promoción.</p> <p>ARTÍCULO 2°. Reconocimiento. Se reconoce a Doncello Caquetá como cuna del cultivo, producción y procesamiento del caucho natural en Colombia, resaltando su rol pionero e histórico del caucho del país.</p> <p>Parágrafo 1°. Promuévase el Festival de la danza de la labor Cauchera en El Doncello Caquetá como un espacio cultural y económico que promueva la articulación entre la industria del caucho, las artes, la artesanía y el turismo, con la participación de actores locales, nacionales e internacionales. Este evento incluirá foros sobre la historia y el futuro del caucho, exhibiciones artesanales y la participación de representantes culturales, tales como las embajadoras culturales del festival, quienes promoverán el caucho y sus manifestaciones artísticas a nivel internacional.</p> <p>Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional queda facultado para asesorar la postulación del Festival de la danza de la labor cauchera a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en los ámbitos correspondientes.</p> <p>ARTÍCULO 3°. Fomento. Facúltese al Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales y los Gobiernos departamentales, a través de las Secretarías de Agricultura, Cultura y Educación, para contribuir con el fomento, promoción, salvaguardia, protección, conservación y divulgación de las actividades relacionadas con el cultivo,</p>
<p>producción, procesamiento y comercialización del caucho natural en los departamentos de Caquetá, Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare y Putumayo.</p> <p>Esto se realizará mediante la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo sostenible a lo largo de toda la cadena productiva del caucho natural, el respeto por los ecosistemas y la preservación de las tradiciones cauchicultoras en estos departamentos.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en conjunto con los Gobiernos departamentales y municipales deberán promover la salvaguardia y fomento de las manifestaciones culturales relacionadas con el cultivo del caucho, tales como las danzas tradicionales de la labor cauchera, artes, artesanías y actividades turísticas que fortalezcan la identidad cultural de los territorios cauchicultores.</p> <p>ARTÍCULO 4°. Autorizar a los Departamentos Caquetá, Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare y Putumayo, para que adelanten las gestiones de interacción, para generar estrategias que permitan vivificar la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas ancestrales de la música y danza que resaltan la labor cauchera, en Festival de la Danza de la labor Cauchera, que se celebra en el municipio de El Doncello, Caquetá, para garantizar la permanencia de esta manifestación cultural.</p> <p>ARTÍCULO 5°. Incorporación Presupuestal. Autorícese al Gobierno Nacional y a los Gobiernos departamentales de Caquetá, Santander, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Meta, Guaviare y Putumayo a incorporar en el presupuesto general de la Nación en cada vigencia fiscal y en sus presupuestos partidas destinadas a la promoción, exaltación y salvaguardia del cultivo, producción, procesamiento y comercialización del caucho natural. Estas partidas serán utilizadas para apoyar el desarrollo sostenible, preservar las tradiciones heveicultoras y fortalecer la industria en estas regiones para la economía nacional.</p> <p>Parágrafo 1°. Se podrá destinar partidas especiales para la promoción, exaltación y preservación de las manifestaciones culturales y artísticas relacionadas con el caucho, incluyendo la institucionalización de eventos como el Festival de la Danza de la Labor Cauchera en El Doncello, Caquetá. Dichos fondos estarán destinados a iniciativas que promuevan la investigación, puesta en escena y difusión de estas tradiciones a nivel nacional e internacional, involucrando a la industria, las artes y actores locales.</p> <p>Parágrafo 2°. Se establece que lo contemplado en el presente artículo debe ajustarse a las proyecciones presupuestales establecidas en el marco fiscal de</p>	<p>mediano plazo y los rubros financieros disponibles de las autoridades competentes, implementando el principio de progresividad.</p> <p>ARTÍCULO 6°. Formación para el desarrollo sostenible en la cadena del caucho. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con las autoridades ambientales y educativas territoriales, podrá implementar programas de formación, capacitación y transferencia de conocimiento dirigidos a productores, transformadores y comercializadores del caucho natural.</p> <p>Estos programas deberán tener como eje central la sostenibilidad ambiental, social y económica a lo larga de la cadena productiva del caucho, incorporando contenidos sobre:</p> <p>a) Buenas prácticas agrícolas y forestales b) Uso eficiente de los recursos naturales y conservación del suelo y el agua c) Gestión adecuada de residuos y subproductos del caucho d) Prevención de la deforestación y protección de la biodiversidad e) Procesos de economía circular aplicables al sector cauchero f) Estrategias de adaptación al cambio climático g) Valoración y fortalecimiento de los saberes ancestrales en armonía con los principios del desarrollo sostenible.</p> <p>Parágrafo. Los programas deberán garantizar la participación activa de las comunidades locales y promoverá el enfoque diferencial y territorial.</p> <p>ARTÍCULO 7°. A partir de la sanción de la presente ley y de conformidad con los artículos 334, 341, 288 y 345 de la Constitución Política y de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y 397 de 1997 autorizase al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación y en los de las entidades territoriales la destinación nacional de cofinanciación a las actividades y programas requeridos en la presente ley.</p> <p>ARTÍCULO 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.</p> <div><p>Soledad Tamayo Tamayo Ponencia PL 299 de 2025 Senado, 363 de 2024 Cámara Senadora de la República</p></div>

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 81 DE 2025 SENADO

por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del Código Civil Colombiano y se dictan otras disposiciones – Ley niños invisibles.

<div><div>Bogotá, D. C. Octubre 2025</div><div><div>Honorable Senador</div><div>Julio Elías Chagüi Flórez</div><div>Presidente Comisión Primera Constitucional</div><div>Senado de la República</div><div>Ciudad</div></div><div><div>Ref.: Informe de ponencia positiva para primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República de Colombia del Proyecto de Ley Estatutaria No. 081 de 2025 Senado “Por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del código civil colombiano y se dictan otras disposiciones – ley niños invisibles”.</div></div><div><div>Respetado presidente,</div><div>Atendiendo a la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República de Colombia el Proyecto de Ley Estatutaria No. 081 de 2025 Senado “Por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del código civil colombiano y se dictan otras disposiciones – ley niños invisibles”.</div><div>Cordialmente,</div><div><div></div><div>Germán Blanco Álvarez</div><div>Senado de la República</div><div>Ponente</div></div></div></div>	<div><div>Informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria No. 081 de 2025 Senado “Por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del código civil colombiano y se dictan otras disposiciones – ley niños invisibles”</div><div>TRÁMITE LEGISLATIVO</div><div><div>El presente proyecto de ley fue radicado el 30 de julio del 2025 en la Secretaria General del Senado por parte de los senadores Oscar Mauricio Giraldo, Karina Espinosa, Jonathan Pulido Hernández, Esperanza Andrade, Lorena Ríos Cuellar, Juan Samy Merheg, Esteban Quintero Cardona y por los Representantes a la Cámara Luis Miguel López, Ángela Vergara, Juan Manuel Cortés Dueñas, Jaime Uscátegui, Daniel Peñacla Calvache, Oscar Dario Pérez Pineda y Yenica Acosta y publicado en la gaceta 1395 del 2025 Senado.</div><div>En la Comisión Primera del Senado de la República fue designado ponente el Senador Germán Blanco.</div><div>OBJETO</div><div><div>Por medio del presente proyecto ley tiene por finalidad reconocer que la existencia legal de toda persona humana inicia desde la fecundación, momento en el cual surge una nueva vida con identidad genética propia y naturaleza humana independiente de la de sus progenitores. En consecuencia, el derecho a la vida debe ser respetado, garantizado y protegido de manera plena e incondicional desde ese instante, abarcando todas las etapas de desarrollo del ser humano. Este reconocimiento responde al deber constitucional del Estado de salvaguardar la dignidad humana como valor fundante del orden jurídico, pilar esencial del Estado Social de Derecho y presupuesto de todos los demás derechos fundamentales.</div><div>En tal sentido, el proyecto propone modificar los artículos 90 y 93 del Código Civil Colombiano con el propósito de reconocer de manera expresa que la existencia jurídica y la protección estatal de los derechos fundamentales se extienden desde la fecundación. Con ello, se garantiza que la vida humana sea tutelada en todo momento, superando visiones meramente patrimoniales del concebido y reafirmando el compromiso del Estado con la defensa de la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la justicia social. Esta reforma representa, por tanto, una respuesta jurídica a la necesidad de fortalecer la cultura de respeto por la vida y de asegurar la coherencia entre la ciencia, el derecho y los principios fundamentales que orientan la Nación.</div></div></div></div>
<div><div>INTRODUCCIÓN.</div><div><div>El presente proyecto de ley surge de la necesidad de reafirmar el valor intrínseco y la dignidad inherente de toda vida humana desde su inicio, así como de adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a la realidad científica y a los principios constitucionales que fundamentan el Estado Social de Derecho. La iniciativa propone reconocer al ser humano en gestación como sujeto de derechos desde el momento de la fecundación, garantizando su protección integral y la del entorno materno que le da origen.</div><div>La legislación civil vigente, redactada hace más de un siglo, establece que la existencia jurídica de la persona principia con el nacimiento con vida. Sin embargo, los avances científicos y las reflexiones jurídicas contemporáneas demuestran que la vida humana inicia desde la fecundación, etapa en la que ya existe un individuo biológicamente distinto, con una identidad genética propia e irrepetible.</div><div>El proyecto no busca modificar la concepción filosófica del orden jurídico colombiano, sino reafirmar el compromiso del Estado con la defensa de la vida y la dignidad humana. El reconocimiento de la existencia legal desde la fecundación implica un fortalecimiento del principio de igualdad, al evitar que etapas del desarrollo biológico sirvan como criterio de exclusión o jerarquización del valor de las personas. Cada ser humano, sin importar su grado de desarrollo o condición, merece igual respeto, protección y reconocimiento ante la ley.</div><div>Así entonces, la propuesta busca consolidar un marco jurídico que promueva la responsabilidad social y la corresponsabilidad familiar e institucional frente a la maternidad, la infancia y la protección del concebido. No se trata de una norma de carácter restrictivo, sino de una legislación que reafirma el deber del Estado y de la sociedad de acompañar, cuidar y proteger a la mujer gestante y al niño en desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en condiciones de dignidad y respeto.</div><div>Con esta iniciativa se logra que armonizar la tradición jurídica con el conocimiento científico contemporáneo y los fundamentos consagrados en la Constitución. Reafirma que la vida humana constituye el bien jurídico supremo, fundamento y condición de todos los demás derechos y que su respeto desde la concepción es una expresión concreta del compromiso de Colombia con la defensa de la persona humana, la justicia y la solidaridad social.</div></div><div><div>ANTECEDENTES DEL PROYECTO</div><div><div>El presente proyecto de Ley Estatutaria fue presentado ante el Senado de la República en la Legislatura 2020-2021, con el número 120 del 2021, teniendo como autora principal a la Senadora Esperanza Andrade. El proyecto fue archivado por tránsito de legislatura, conforme el Artículo 190 Ley 5 de 1992 y Artículo 162 de la Constitución.</div></div></div></div>	<div><div>DEL TIPO DE LEY</div><div><div>La modificación de los elementos que son próximos al contenido esencial del derecho fundamental establecen su trámite de reserva estatutaria. Puesto que, Los derechos fundamentales a que referencia el artículo 152, literal a, de la Constitución debe entenderse para todos los aspectos que identifican e individualizan el derecho fundamental, entendidos éstos como “los elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental”, según este criterio los derechos fundamentales se amplían con el paso del tiempo. Por tanto, el contenido de los derechos cambia y se expande, para lo cual es importante la labor de actualización del regulador estatutario y del juez constitucional, por lo cual se establece que las actualizaciones esenciales en el contenido, objeto y prerrogativas de un derecho fundamental deben tramitarse a través del procedimiento de ley estatutaria.</div><div>Esta situación que claramente se evidencia en el presente proyecto de ley, toda vez que extiende el inicio de la protección legal del derecho a la vida, se establece un nuevo sujeto de derechos y se otorgan mecanismos para la protección de la vida existente en el vientre materno.</div><div>En el mismo sentido, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido que, es competencia del legislador estatutario desarrollar aspectos importantes del núcleo esencial, con lo que parece sugerirse que tal núcleo es delineado tanto por el constituyente como por el legislador estatutario. Algunos de los asuntos importantes del núcleo esencial que son propios de las leyes estatutarias y que han sido señalados por la Corte son: (i) la consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, y (ii) los principios básicos que guían su ejercicio. Otro elemento que puede deducirse a partir de un examen de la estructura de los derechos fundamentales es la definición de las prerrogativas que se desprenden del derecho para los titulares y que se convierten en obligaciones para los sujetos pasivos.</div><div>En la legislatura 2020-2021 donde fue inicialmente tramitado, es de anotar que el proyecto tuvo debate en la Comisión primera del Senado, el cual fue suspendido para que la subcomisión que fue nombrada estableciera si el proyecto debía ser tratado como estatutario. (Gaceta 608/2020) El informe concluye que: Conforme lo expuesto en dicho informe, la subcomisión recomienda a los miembros de la comisión primera Constitucional del Senado, tramitar por vía de ley estatutaria el proyecto de ley N. 140 de 2020 senado “Por medio del cual se modifican los artículos 90 y 93 y se dictan otras disposiciones” (subrayadas fuera del texto).</div><div>Dicho Proyecto de Ley Estatutaria, ha servido de base para el Proyecto que en esta ocasión se pone a consideración del Congreso de la República, debido a que el Estado Colombiano, sus gobernantes, operadores jurídicos y constituyente primario, tienen el deber de velar por la protección de la vida, para cumplir con ese imperativo moral y normativo, por lo que les</div></div></div>

corresponde a los congresistas actualizar la normatividad vigente según el devenir de las relaciones sociales y avances científicos en procura del respeto por la vida, sin discriminación alguna.

FUNDAMENTO DEL PROYECTO

La Constitución de 1991 ha instituido valores y principios que han resultado ser significativos y que resumen los intereses más representativos del pueblo colombiano, dentro de los cuales podemos decir que el más sobresaliente siempre ha sido el respeto a la vida, tanto así es que se ha contemplado como primer derecho fundamental, el cual se encuentra consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna.

Nuestra sociedad siempre se ha erigido sobre la base del respeto de la vida humana. Este atributo debe ser reconocido desde el primer instante de la existencia del ser humano entendiéndose desde la concepción y no a partir del cumplimiento de requisitos arbitrarios impuestos por la ley, como lo es el hecho del nacimiento, o al alcanzar cierto grado de desarrollo biológico o simplemente cumplir con la condición de haber sido deseado.

En consecuencia, desconocer la existencia de aquellas criaturas en el vientre o que perecen antes de estar completamente separadas de su madre contradice los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), donde se consigna que *“toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”*¹

Es importante recordar que el artículo 93 de la Constitución Política señala que las disposiciones de derecho internacional priman sobre las normas internas, de allí que, a partir de una interpretación integral de las normas internas e internacionales sobre la materia, el ser humano tiene derecho a la protección de su vida desde la concepción.

¹https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_americana_derechos_humanos.html DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS, CAPÍTULO I, ENUMERACIÓN DE DEBERES, Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos, numeral 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 4. Derecho a la Vida, numeral 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

de la mujer son deberes complementarios que el Estado debe promover de manera integral, equilibrada y armónica.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 11, consagra que “el derecho a la vida es inviolable”, estableciendo con ello un mandato absoluto que no admite excepciones ni condicionamientos. Este principio señala que la vida es el presupuesto indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho, pues sin ella no existe posibilidad real de libertad, dignidad ni desarrollo humano. De este modo, toda acción legislativa o política pública debe orientarse a fortalecer la protección de la vida en todas sus etapas, especialmente en aquellas más frágiles y dependientes, como la gestación.

El reconocimiento jurídico del ser humano en gestación como sujeto de derechos no implica desconocer los derechos, la dignidad ni la autonomía de la mujer. Por el contrario, supone reforzar el compromiso del Estado con su bienestar integral. La maternidad, entendida como un proceso biológico y social, exige acompañamiento, protección y apoyo.

Este proyecto de ley promueve un enfoque humanista e incluyente que coloca en el centro de la acción estatal la protección de toda vida humana y la dignidad de quienes la custodian. Su finalidad no es establecer divisiones ni priorizar a un grupo sobre otro, sino reafirmar que la vida, en cualquiera de sus etapas, es un bien jurídico superior que debe ser protegido de manera efectiva y no selectiva. La defensa del ser humano en gestación y la garantía de los derechos de la mujer no son causas contrapuestas, sino expresiones complementarias de una misma obligación moral, jurídica y social.

La protección integral de la vida desde la fecundación se erige como una expresión concreta del mandato constitucional de dignidad humana. Este principio no distingue entre etapas, capacidades ni circunstancias, sino que reconoce en cada ser humano un valor intrínseco que merece tutela.

MARCO LEGAL

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA (ARTÍCULO 11 C.P.)

La Constitución Política de Colombia consagra categóricamente en su artículo 11 que "el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte". Este derecho es el fundamento de todos los demás, y como tal, debe aplicarse también al ser humano en gestación, quien ostenta una realidad biológica humana independiente desde la fecundación. Además, que se asegura a los integrantes del pueblo colombiano, la vida (preámbulo). En consideración a ello, resulta

NECESIDAD DE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 90 Y 93 DEL CÓDIGO CIVIL

Actualmente, el Código Civil Colombiano contiene disposiciones que limitan injustificadamente la titularidad de derechos del ser humano en gestación. Específicamente:

- **Artículo 90:** Condiciona el reconocimiento de la existencia jurídica al nacimiento con vida.
- **Artículo 93:** Dispone que los derechos del que está por nacer se subordinan a que nazca vivo, limitándolos al ámbito patrimonial.

Estas disposiciones, redactadas en el siglo XIX, no reflejan ni el avance constitucional, ni el desarrollo científico sobre la vida humana en gestación.

La interpretación moderna del derecho a la vida, la protección del no nacido y el interés superior del niño exige una revisión profunda del marco normativo civil, en especial del artículo 93, para reconocer que los derechos del ser humano en gestación no pueden estar condicionados al nacimiento vivo, al menos en lo que concierne a su dignidad humana, su derecho a la vida, su integridad y su protección jurídica.

Actualmente, el artículo 90 del Código Civil Colombiano establece:

"La ley protege la vida del que está por nacer. Los derechos que se le conceden al nasciturus están subordinados a la condición de que nazca vivo."

Esta disposición refleja una visión restringida y patrimonialista del ser humano en gestación, limitando su reconocimiento como sujeto de derechos únicamente si nace vivo. Sin embargo, esta visión no es coherente con la Constitución, el bloque de constitucionalidad, ni con el conocimiento científico moderno.

Es urgente modificar esta norma para garantizar la protección jurídica plena e incondicional de la vida humana desde la fecundación, sin limitarla a consideraciones patrimoniales o utilitaristas.

LA VIDA HUMANA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

En el marco del Estado Social de Derecho, el respeto y la protección de la vida humana constituyen la base sobre la cual se edifican todos los demás derechos. Sin embargo, en el debate público contemporáneo se ha difundido la idea de que la defensa de la vida en gestación podría entrar en tensión con la autonomía y los derechos de la mujer. Tal percepción resulta errónea pues no existe una verdadera colisión entre ambos intereses. Por el contrario, la protección de la vida del ser humano en desarrollo y la garantía de los derechos

importante recordar lo precisado por el Constituyente de 1991, al expedir el artículo 11 constitucional:

“...en materia de la Carta de Derechos, tanto el trabajo de la Comisión Primera como el de la Asamblea misma han generado una de las cartas de derechos humanos probablemente más completas que puedan leerse en constitución alguna vigente. El debate fue arduo entre quienes consideraban que el solo enunciado de algunos de ellos hubiera sido suficiente, y quienes consideramos que la tarea pedagógica de la Constitución colombiana bien ameritaba el esfuerzo de poder incluir de una manera casi de enseñanza, didáctica, cuáles son esos derechos fundamentales del hombre colombiano. Desde luego, nos inspiramos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas y en el Pacto de San José y todo el sistema interamericano que nos rige, y por ello, tanto en los derechos como en los principios, dejamos consagrada esa norma que inspirará -esperamos así- lo que es la conducta de los colombianos, o sea el respeto a la vida y su inviolabilidad. Ese respeto y esa inviolabilidad se hizo más patente desde el momento en que los distintos debates que aquí se produjeron, con el propósito explícito de abrirle el campo a la llamada opción de la maternidad, fueron sistemáticamente derrotados por una amplísima mayoría de esta Asamblea; y, por lo tanto pensamos que la norma y la cláusula consagrada de que la vida es inviolable amparará por mucho tiempo lo que es la sabiduría del Pacto de San José, del cual hace parte Colombia, por virtud de la cual la vida es y tiene que ser respetada desde el momento de su concepción”.

Teniendo en cuenta lo enunciado y que existen antecedentes evidenciados en la tradición jurídica de nuestro hemisferio, en donde el derecho a la vida siempre ha tenido un valor primordial y se ha entendido este derecho como una prerrogativa sin limitaciones ni condiciones sujetas a interpretaciones de un operador jurídico o gobernante, es que el Estado debe hacer todo lo posible para protegerla.

Cabe aclarar que, al libelo del artículo 11 el término “inviolable” corresponde a la forma de correlación denominada “contradicción”, en la que solo hay dos alternativas mutuamente excluyentes; en este caso, el derecho a la vida es violable, o es inviolable.

Así mismo, es contundente la Constitución al precisar que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (ARTÍCULO 44 C.P.)

El artículo 44 establece que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", y la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples fallos que el concepto de "niño"

no se limita al nacido vivo, sino que puede extenderse al nasciturus, especialmente en contextos de protección.

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULO 93 C.P.)

Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo preámbulo establece que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección especial, tanto antes como después del nacimiento".

Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), en su artículo 4.1, señala:

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción."

Este estándar del bloque de constitucionalidad obliga al legislador a adecuar el Código Civil para garantizar la protección jurídica del ser humano en gestación.

CODIGO CIVIL - LEY 84 DE 1873

En los artículos 33 y 74 se define a la persona como “todo individuo de la especie humana”. Y, si se considera que la concepción, entendida como la fecundación de un óvulo por el espermatozoide, no genera ningún otro ser que no sea el ser humano, puede colegirse que se es persona desde la fecundación. De igual forma, mediante el artículo 91 se estableció una protección legal al no nacido, propendiendo porque su vida se desarrolle, teniendo el juez que adoptar las providencias necesarias cuando de algún modo corra peligro.

Artículo 33. Palabras relacionadas con las personas. La palabra persona en su sentido general se aplica (rá) a la especie humana, sin distinción de sexo.

Artículo 74. Personas naturales. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.

Artículo 91. “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquier persona, o de oficio, las providencias le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligrá”.²

² http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html. Ley 84 DE 1873, Código Civil Colombiano.

MARCO JURISPRUDENCIAL COLOMBIANO EN FAVOR DE LA VIDA DEL QUE ESTÁ POR NACER

La protección de la vida del que está por nacer siempre ha sido un tema de gran discusión y diversos pronunciamientos en la doctrina y jurisprudencia colombiana y por ende se ha desarrollado un argumento sólido sobre la defensa de la vida humana, siendo la excepción la sentencia C-355 de 2006, aun así, dentro de sus salvamentos de voto se evidencian posturas férreas en defensa de la vida del nasciturus.

En sentencias C-133 de 1994, C-013 de 1997, T-223 de 1998 y C-647 de 2001 (salvamento de voto) la Corte Constitucional expresó vastas razones por las cuales la admisión de una conducta que busca acabar con la vida de un ser humano que está por nacer, es totalmente contraria a los principios constitucionales:

“La vida del nasciturus encarna un valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que representa (...) No se requiere ser persona humana con la connotación jurídica que ello implica, para tener derecho a la protección de la vida, pues el nasciturus (...) tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, independientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como persona” (Sentencia C-133 de 1994).⁴

“La constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible , del cual es titular todo ser humano, desde el principio hasta el final de su existencia física (...) En criterio de esta Corte, la vida que el Derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre materno, continua a partir del nacimiento de la persona y cobija a esta a lo largo de todo su ciclo vital” (Sentencia C-013 de 1997).⁵

“El grupo, los llamados nasciturus, se encuentra protegido por el espectro de privilegios que la Carta Fundamental reserva para los niños. La tradición jurídica más acendrada, que se compagina con la filosofía del Estado Social de Derecho, ha reconocido que el nasciturus es sujeto de derechos en cuanto es un individuo de la especie humana. Los innumerables tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia, así como el preámbulo de la Constitución Política, cuando asegura que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de sus integrantes; el artículo 43, al referirse a la protección de la mujer embarazada,

⁴ Sentencia C-133 de 1994.

⁵ Sentencia C-013 de 1997.

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - LEY 1098 DE 2006.

El legislador al expedir este cuerpo normativo en el artículo 17, le dio a la vida un alcance general e integral que involucra un conjunto de condiciones y aspectos, los cuales deben ser garantizados al nasciturus desde su concepción. Así mismo, facultó a la madre para solicitar alimentos del hijo que está por nacer.

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la fecundación cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano (...)

Artículo 111.Alimentos. Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas: 1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.³

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - LEY 1564 DE 2012

El artículo 53 de esta norma ha brindado al concebido la capacidad de ser parte dentro de un proceso para la defensa de sus derechos, entendiendo que el concebido será tenido en cuenta como un ser humano y por ende se le deben garantizar todos los derechos en su calidad de sujeto de derechos y obligaciones:

Artículo 53. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso:

1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
3. El concebido, para la defensa de sus derechos.

³ https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm. LEY 1098 DE 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html. Ley 84 DE 1873, Código Civil Colombiano.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm. LEY 1098 DE 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html.Artículo 53 LEY 1564 DE 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones

y el artículo 44, cuando le garantiza a los niños el derecho a la vida, no hacen otra cosa que fortalecer la premisa de que los individuos que aún no han nacido, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada desde el momento mismo de la concepción la protección de sus derechos fundamentales. La Constitución busca preservar al no nacido en aquello que le es connatural y esencial: la vida, la salud, la integridad física, etc. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un principio lógico de razonabilidad exige considerar en particular cada uno de los derechos fundamentales, incluso aquellos que se predicán exclusivamente de los niños, para determinar cuál puede y cuál no puede ser exigido antes del nacimiento. ”

“Los derechos patrimoniales de orden legal que penden sobre el nasciturus, se radican en cabeza suya desde la concepción, pero sólo pueden hacerse efectivos, si y solo si, acaece el nacimiento. Por el contrario, los derechos fundamentales pueden ser exigibles desde el momento mismo que el individuo ha sido engendrado.” (Sentencia T-223 de 1998).⁶

(...) la disposición no asegura la protección penal del derecho a la vida del nasciturus y con ello desconoce la Carta que ordena perentoriamente al Estado velar por su conservación. Lo hace por cuanto tratándose de tipos penales cuyo objeto jurídico protegido son los derechos fundamentales, y en especial cuando dicho derecho es la vida de un ser humano que por su condición de nonato se halla en situación evidente de indefensión, la ausencia de sanción tiene como consecuencia inmediata la mencionada desprotección. (Sentencia C-647 de 2001- salvamento de voto Magistrado Alfredo Beltrán Sierra).⁷

“Resalta, por su especial aplicabilidad al asunto objeto de examen, el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica ya que se refiere expresamente a la garantía de vida humana desde el momento mismo de su concepción. La forma como esta disposición ha sido redactada obvia las discusiones a las que se prestan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, mientras estos dos últimos instrumentos internacionales generan múltiples interrogantes en relación con el momento en que se entra a ser titular del derecho a la vida y por consiguiente se prestan a elucubraciones, el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica arroja, a mi juicio, mayor claridad sobre el momento en el cual la vida se convierte en un valor intangible en el contexto americano. Así se lee en esa disposición que: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.” Se trata de una normativa claramente aplicable a uno de los extremos jurídicos debatidos: el de la vida de quien está por nacer. Ahora bien, es necesario destacar que las expresiones “en general”

⁶ Sentencia T-223 de 1998

⁷ Sentencia C-647 de 2001- salvamento de voto Magistrado Alfredo Beltrán Sierra

que contiene el artículo 4° transcrito equivalen a vocablo “siempre” y que la frase “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” pueden interpretarse en el sentido de que están ligadas a situaciones donde se puede llegar a justificar la pena de muerte, a interpretar esta disposición con fundamento en el artículo 29 de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena de 21 de marzo de 1986, aprobada por la Ley 406 de 1997. Es decir, conforme a su significado corriente, es forzoso concluir que la expresión “en general” que se viene analizando no excluiría excepciones a la garantía de la vida desde el momento de la concepción.” (Sentencia. C-355 de 2006 - Salvamento de voto Magistrado Álvaro Tafur Galvis.)⁸

“Los magistrados que salvamos el voto consideramos constitucionalmente inaceptable la distinción planteada en la Sentencia, según la cual la vida del ser humano no nacido es tan sólo un “bien jurídico”, al paso que la vida de las personas capaces de vida independiente sí constituye un derecho subjetivo fundamental. A nuestro parecer, la vida humana que aparece en el momento mismo de la concepción constituye desde entonces y hasta la muerte un derecho subjetivo de rango fundamental en cabeza del ser humano que la porta, y en ningún momento del proceso vital puede ser tenida solamente como un “bien jurídico”, al cual pueda oponerse el mejor derecho a la vida o a la libertad de otro ser humano. (Sentencia. C-355 de 2006 - Salvamento de voto Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil.)⁹

"VIDA HUMANA-Determinación del momento a partir del cual se inicia (Salvamento de voto)

Los datos científicos que demuestran que la vida humana empieza con la concepción o fecundación ya habían sido admitidos por esta Corporación como conclusiones válidas obtenidas por la ciencia contemporánea. Ciertamente, como se vio, en la Sentencia C-133 de 1994 la Corte había definido que la vida humana comienza con la concepción y que desde ese momento merece protección estatal; y lo había hecho con base en datos científicos que sirvieron de fundamento probatorio a la providencia. Por lo cual, sostener lo contrario en una Sentencia posterior, cambiando el sentido de la jurisprudencia, exigía desplegar una carga argumentativa científicamente soportada, que demostrara claramente que la vida humana no empieza en ese momento, cosa que no hizo la Sentencia"(Sentencia 355-2006 - Consideraciones).

⁸ Sentencia c-355 de 2006. Salvamento de voto Magistrado Álvaro Tafur Galvis

⁹ Sentencia c-355 de 2006. Salvamento de voto Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil.

"NASCITURUS-Titular del derecho a la vida/**DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**-Derecho a la vida del que está por nacer (Salvamento de voto)

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos, adoptada y proclamada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, en su artículo 6° dice lo siguiente: “Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Para los suscritos, la norma internacional transcrita señala con precisión que una vez que aparece la vida humana en cabeza de un ser biológicamente individualizado, como según la ciencia lo es el nasciturus, en él se radica la personalidad jurídica, es decir, la efectiva titularidad de derechos fundamentales, entre ellos el primero y principal, la vida, así como la aptitud para ser titular de otra categoría de derechos. En el mismo orden de ideas, el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José de Costa Rica) señala que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, en una clara alusión a que todo ser humano es titular de los derechos humanos que reconoce el Derecho Internacional. Con más claridad aún, el numeral 2° del artículo 1° de esta misma Convención dice así: 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Por lo anterior, estiman los suscritos que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no cabía duda respeto a que el ser humano que está por nacer tiene derecho a ser reconocido como persona, y en tal virtud es titular del derecho a la vida, por lo cual los artículos de la Constitución Política relativos a este derecho debieron ser interpretados a la luz de esta premisa fundamental” "(Sentencia 355-2006 - Consideraciones).

CONFLICTO DE INTERES

De conformidad con el Artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, “*Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones*”, que establece que tanto el autor del proyecto y el ponente dentro de la exposición de motivos, deberán incluir un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, sirviendo de guía para que los otros congresistas tomen una decisión en torno, si se encuentran incursos en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

En ese orden de ideas, el presente proyecto de ley, por ser de carácter general, no configura un beneficio particular, actual y directo para ningún congresista.

Finalmente, sobre los conflictos de interés resulta importante recordar lo señalado por el Consejo de Estado que, en la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable mediante Sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, señaló que:

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

En el mismo sentido, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) **Beneficio particular:** aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) **Beneficio actual:** aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) **Beneficio directo:** aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

Con base en lo anterior, se considera que, frente al presente proyecto, no se generan conflictos de interés alguno, puesto que las disposiciones aquí contenidas son generales y no generan beneficios particulares, actuales y directos.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de Ley no exime del deber del Congresista de identificar causales adicionales.

IMPACTO FISCAL


El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, establece que en todo proyecto de ley que se ordene gastos debe existir en la exposición de motivos el respectivo análisis del impacto fiscal de la iniciativa.

Es importante mencionar que en la presente iniciativa no genera ningún costo fiscal a mediano o largo plazo y se deja de presente en la exposición de motivos.

PROPOSICIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República, dar Primer Debate al Proyecto de Ley Estatutaria No. 081 de 2025 Senado “Por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del código civil colombiano y se dictan otras disposiciones – ley niños invisibles”, conforme al texto originalmente radicado y publicado en la gaceta 1395 del 2025 Senado.

Cordialmente,

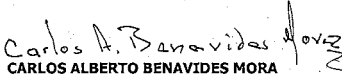


Germán Blanco Álvarez
Senado de la República
Ponente

TEXTOS DE PLENARIA

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 405 DE 2025 SENADO, 279 DE 2024 CÁMARA

mediante la cual se prorroga el Decreto Ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y se dictan otras disposiciones.

<p>TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PROYECTO DE LEY No. 405 DE 2025 SENADO – 279 DE 2024 CÁMARA “MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA EL DECRETO LEY 893 DE 2017, SE PROMUEVE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL –PDET– Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.</p> <p>EL CONGRESO DE COLOMBIA</p> <p>D E C R E T A:</p> <p>ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley modifica el Decreto Ley 893 de 2017 con el fin de promover el fortalecimiento institucional, técnico y financiero de los municipios en los que se desarrollen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- mediante la disposición de un marco legal ampliado que facilite la articulación de instrumentos de planeación destinados a estos territorios y contribuya a superar barreras sociales, económicas, institucionales y demográficas para garantizar la cobertura de los servicios del Estado en las zonas más vulnerables del territorio nacional.</p> <p>ARTÍCULO 2. PRÓRROGA EN LA IMPLEMENTACIÓN. Modifíquese el artículo primero del Decreto Ley 893 de 2017, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 1º. OBJETO. Créanse los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.</p>	<p><i>Los PDET se formularán por una sola vez y estarán vigentes hasta el 28 de mayo de 2037. Serán coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en ejercicio de las funciones que le son propias, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2366 de 2015, modificado por el Decreto 1223 de 2020.</i></p> <p>PARÁGRAFO. Los planes sectoriales y programas que se creen para la implementación de la RRI incorporarán en su diseño y ejecución el enfoque étnico y campesino.</p> <p>ARTICULO 3º. ARMONIZACIÓN Y ARTICULACIÓN. Adiciónese un párrafo artículo 6 del Decreto Ley 893 de 2017, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 6º. ARMONIZACIÓN Y ARTICULACIÓN. Los PDET y los PATR deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en aplicación de los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. Los PDET y los PATR integrarán otros planes del territorio que contribuyan a su transformación.</p> <p>PARÁGRAFO 1. En los casos donde el PDET cuya realización esté proyectada para hacerse en las regiones establecidas a través del presente decreto, que incluyan territorios y zonas con presencia de pueblos, comunidades, grupos étnicos y comunidades campesinas, los PATR se armonizarán con los planes de vida, planes de desarrollo sostenible, planes de salvaguarda, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes.</p> <p>PARÁGRAFO 2. Los Planes Nacionales Sectoriales, Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Planes Integrales de Reparación Colectiva, los Planes de Retorno y Reubicación, el Plan Marco de Implementación cuando haya lugar y demás instrumentos derivados del Acuerdo Final deberán articularse con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- y los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR-, garantizando la concurrencia de recursos para su implementación</p>
<p><i>prioritaria, que deberán incluirse en los planes estratégicos y los planes operativos anuales de las entidades correspondientes.</i></p> <p><i>El Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Agencia de Renovación del Territorio, en un término no mayor a seis meses desde la expedición de la presente ley, entregarán una propuesta al Gobierno Nacional para la reglamentación de mecanismos e instrumentos que hagan efectiva la articulación y concurrencia.</i></p> <p>ARTÍCULO 4º. APOYO AL SANEAMIENTO FISCAL. Modifíquese el artículo 9 del Decreto Ley 893 de 2017 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 9º. FINANCIACIÓN. Para la financiación de los PDET y los PATR el Gobierno Nacional y las entidades territoriales contarán con los recursos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas, conforme a sus respectivos regímenes legales, así como recursos de la cooperación internacional.</p> <p><i>La financiación de los PDET y los PATR se programará en el marco de la sostenibilidad fiscal de acuerdo al marco de gasto de mediano plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal. En concordancia con el artículo transitorio “Plan de Inversiones para la Paz”, del Acto Legislativo 01 del 2016, estas inversiones serán adicionales a las ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial y serán orientadas al cierre de brechas sociales, económicas e institucionales.</i></p> <p><i>Los municipios PDET podrán, en cualquier momento, contratar créditos en condiciones blandas con entidades financieras de redescuento, quienes implementarán una línea de crédito para tal fin.</i></p> <p>PARÁGRAFO: Facúltase a las organizaciones legalmente constituidas de Organizaciones de Base, Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, Cabildos y/o Resguardos Indígenas, reconocidas por el Ministerio del Interior y los Centros de</p>	<p><i>emprendimiento innovación y Paz-REDES LAB para presentar y ejecutar proyectos con enfoque diferencial étnico, por lo tanto, estas facultades, líneas de acción y programas étnicos será incorporados en el manual de obras por impuestos y las convocatorias derivadas de esta Ley. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2535 de 2025 y demás disposiciones aplicables para garantizar la participación efectiva de grupos étnicos.</i></p> <p>ARTÍCULO 5. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS. Modifíquese el artículo 11 del Decreto Ley 893 de 2017, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 11. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES. Para garantizar la adecuada participación de los actores del territorio en los PDET, el Gobierno nacional por intermedio de las entidades competentes, pondrá en marcha medidas para fortalecer las capacidades de gobernanza, gestión y planeación, así como de seguimiento, veeduría y control social, respetando la diversidad étnica y cultural promoviendo la dignidad, el reconocimiento y la participación equilibrada de la mujer conforme a los valores familiares y al orden social, garantizando su aporte en la construcción y vigilancia de las políticas públicas del territorio.</p> <p><i>Para tal fin el Gobierno Nacional, por intermedio de Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Agencia de Renovación del territorio, adoptará un programa de fortalecimiento de capacidades de los actores territoriales en los municipios beneficiarios de los PDET para garantizar su participación en la implementación de estos programas y facilitar la presentación de sus proyectos y deberá incorporar mecanismos para fortalecer los procesos de transparencia y rendición de cuentas de estos municipios.</i></p> <p>PARÁGRAFO. El programa de fortalecimiento de capacidades será presentado por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.</p>

<p>ARTÍCULO 6. SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN. El Departamento Nacional de Planeación estructurará un plan de medidas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y presentará al Congreso un informe con las disposiciones tomadas desde el Gobierno Nacional y las necesidades legislativas adicionales para el cumplimiento de los objetivos aquí propuestos.</p> <p>PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades territoriales en articulación con las contralorías municipales o departamentales, según sea el caso, y las personerías municipales prestarán todos los medios técnicos y logísticos con el fin de garantizar el derecho de reunión de las mesas comunitarias municipales que se encuentran establecidas en el respectivo municipio.</p> <p>ARTÍCULO 7º. Adiciónese un párrafo al artículo 3 del Decreto Ley 893 de 2017, el cual quedará así:</p> <p>PARÁGRAFO 3º. <i>Intégrese una comisión conformada por la Dirección Nacional de Planeación, quien coordinará, el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Renovación del Territorio, la cual elaborará un estudio técnico sobre el avance de la implementación de los PDET, en un término no mayor a 1 año contado a partir de la publicación de la presente ley.</i></p> <p><i>El estudio será usado para realizar una actualización integral del mapa de los municipios PDET reconociendo las características sociales, históricas, culturales y productivas. Se tendrán en cuenta los cuatro criterios de priorización establecidos en el punto 1.2.3 del Acuerdo Final de Paz para la focalización de los municipios beneficiarios de estos programas y la participación de la ciudadanía.</i></p> <p>ARTÍCULO 8. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean expresamente contrarias.</p>	<p>Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto definitivo aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la República del día 26 de noviembre de 2025 al PROYECTO DE LEY No. 405 DE 2025 SENADO – 279 DE 2024 CÁMARA “MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA EL DECRETO LEY 893 DE 2017, SE PROMUEVE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL –PDET– Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.</p> <p>Cordialmente,</p> <p> CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA Senador Ponente</p> <p>El presente Texto Definitivo, fue aprobado con modificaciones en Sesión Plenaria del Senado de la República del día 26 de noviembre de 2025, de conformidad con el texto propuesto para segundo debate.</p> <p> DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ Secretario General</p>
--	--

CONTENIDO

Gaceta número 2312 - martes, 9 de diciembre de 2025	
SENADO DE LA REPÚBLICA	
PONENCIAS	
Informe de ponencia para primer debate, al Proyecto de Ley número 299 de 2025 Senado, 363 de 2024 Cámara, por medio de la cual se exalta el cultivo, producción y procesamiento del caucho natural, se reconoce al municipio de El Doncello, Caquetá, como cuna del caucho natural en Colombia y se promueve el festival de la danza de la labor cauchera.	1
Informe de ponencia positiva para primer debate en la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República de Colombia del Proyecto de Ley Estatutaria número 81 de 2025 Senado, por medio de la cual se reconoce al ser humano en gestación como sujeto de derechos, se modifican los artículos 90 y 93 del Código Civil Colombiano y se dictan otras disposiciones – Ley niños invisibles.	6
TEXTOS DE PLENARIA	
Texto definitivo aprobado en sesión plenaria del Senado de la República del día 26 de noviembre de 2025 al Proyecto de Ley número 405 de 2025 Senado, 279 de 2024 Cámara, mediante la cual se prorroga el Decreto Ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y se dictan otras disposiciones.	10